

CON FIGURAS CIRCULARES 5-6

ANTONELLA ATTILI • JOSÉ BUENDÍA • MARÍA E. CAMUS
• ROSALBA CARRASCO • MARCELO CONTRERAS •
ROLANDO CORDERA • ENRIQUE FLORESCANO • ANA
GALVÁN • LUIS EMILIO GIMÉNEZ-CACHO • CLARISA
HARDY • DAVID IBARRA • CLARA JUSIDMAN •
LEONARDO LOMELÍ • CARLOS MÁRQUEZ • RODRIGO
MOYA • JOSÉ ANTONIO OCAMPO • PEDRO ÁNGEL
PALOU • MAYA LORENA PÉREZ RUIZ • ENRIQUE
PROVENCIO • LUIS SALAZAR • LAURA SALINAS •
ADOLFO SÁNCHEZ REBOLLEDO • HUMBERTO SCHETTINO

REVISTA DE LA FUNDACIÓN CARLOS PEREYRA Y DEL
INSTITUTO DE ESTUDIOS PARA LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA

CON FIGURA CIONES

Núm. 5-6

Octubre-diciembre de 2001

Rolando Cordera Campos	P resentación	3
Rolando Cordera Campos y Adolfo Sánchez Rebolledo	L os cien días de Fox: las disonancias de la transición	5
Rosalba Carrasco y Enrique Provencio	C alidad integral de vida y superación de la pobreza	11
Maya Lorena Pérez Ruiz	O tro escenario, ¿la misma confrontación?	23
Laura Salinas Beristáin	H acia la igualdad real de hombres, mujeres, niños y niñas	38
Enrique Florescano	M itos, historia, nacionalismo e identidades colectivas	56
Carlos Márquez Padilla	R eforma laboral integral	69
Luis Salazar	L a izquierda y el liberalismo	79
Humberto Schettino	P opulismo, participación y consolidación de la democracia	94
Leonardo Lomelí Vanegas	L a seguridad social en México	105

ECONOMÍA POLÍTICA DE LA DEMOCRACIA SOCIAL

David Ibarra	¿R ealidades o subterfugios ideológicos?	116
José Antonio Ocampo	R etomar la agenda del desarrollo	120

ARGUMENTOS

Antonella Attili y Luis Salazar	D erechos humanos y procuración de justicia. Entrevista con Luis de la Barreda	132
María E. Camus y Marcelo Contreras	L a perspectiva liberal. Entrevistas con Gonzalo Martner y Enrique Correa	138
Clarisa Hardy	C recimiento o igualdad? Una polémica artificial	145
José Buendía Hegewisch	L a reforma política para el Distrito Federal	147

INTER LÍNEA

Clara Jusidman	L as políticas sociales al fin del milenio	150
Luis Emilio Giménez-Cacho	E l PRI contra sí mismo	156
Ana Galván Chávez	M iguel León-Portilla: la palabra-recuerdo	159
	L ibros recientes	164
Pedro Ángel Palou	S útil engaño	166

DOCUMENTOS

Fortalecer el entramado democrático, Luis Salazar	169
Fotografías de Rodrigo Moya	

CON FIGURA CION ES

Revista de la Fundación Carlos Pereyra y del Instituto de Estudios para la Transición Democrática

Director: Rolando Cordera Campos • *Subdirectora editorial:* Eugenia Huerta • *Secretaria de redacción:* Ana Galván
Consejo editorial: Antonella Attili • Bernardo Barranco • Ma. Amparo Casar • José Carlos Castañeda • Anamari Gomís • Blanca Heredia • Teresa Incháustegui • Marta Lamas • Julio López G. • Rafael López Castro • Rafael Pérez Pascual • María Teresa Priego • Teresa Rojas • Nora Rabotnikof • Carlos Rocés • Jesús Rodríguez Zepeda Adolfo Sánchez Rebolledo • Carlos Tello Díaz

Configuraciones. Revista trimestral, número doble, octubre-diciembre de 2001. Director y editor responsable: Rolando Cordera Campos. Número de certificado de reserva de derechos al uso exclusivo del título 04-2000-022917312900-102. Certificado de licitud de título (en trámite). Cuautla 10, Col. Condesa, 06140 México, D.F. Impreso en Offset Rebosán, S.A. de C.V., Acueducto 115, 14370 México, D.F. Distribución: nosotros mismos.

Diseño original: Rafael López Castro • *Tipografía y formación:* Redacta, S.A. de C.V.

ISSN 1405-8847

Los artículos son responsabilidad de los autores. Tiraje 1 000 ejemplares.

Otro escenario, ¿la misma confrontación?

Maya Lorena Pérez Ruiz*

C*La mayoría de nuestros pronunciamientos son muy discutibles, y no se discuten precisamente porque están en un entorno social que implica otras cosas. Discutir las posiciones de Marcos significa discutir la legitimidad de una causa, y eso siempre es problemático, sobre todo en el nivel intelectual. De una u otra forma eso nos ha hecho, porque créeme que nos hace bien el debate de ideas; de hecho, nosotros hemos sido receptivos a ese debate de ideas, y lamentamos de una u otra forma que no se haya podido dar Subcomandante Marcos, "La entrevista insólita", Proceso, núm. 1271, marzo de 2001.*

Con el arribo de Vicente Fox a la Presidencia de la República, mediante las elecciones federales de 2000, surgió la gran pregunta sobre el camino que tomaría el EZLN ante el nuevo gobierno ya que, con el triunfo de un partido de oposición y con los avances propiciados por la reforma electoral de julio de 1996, dejaron de existir varias de las condiciones que justificaron, en su momento, el levantamiento armado: se avanzó en la ciudadanización de las elecciones dándole al IFE un carácter independiente, el PRI dejó de gobernar como partido de Estado y el nuevo Presidente fue elegido democráticamente. Adicionalmente, el nuevo Presidente, desde su campaña había asumido el compromiso de resolver los puntos que los zapatistas había demandando al gobierno zedillista para volver al diálogo.

Voces optimistas consideraron que estaba muy cerca la firma de la paz cuando, desde su posición como Presidente electo, Fox nombró a Luis H. Álvarez como el responsable de establecer la comunicación con los zapatistas ya que, por su trayectoria política como opositor y por su destacado papel en la primera Copac, se pensó que sería idóneo para lograr el acercamiento.

Los rebeldes, sin embargo, después de su experiencia con los anteriores gobiernos se mostraron cautos con el recién elegido presidente y aun respecto al triunfo de Pablo Salazar Mendiguchía, quien logró la gubernatura de Chiapas gracias a la coalición de partidos de oposición que se enfrentaron al PRI. Y pronto surgieron los primeros indicios de que no sería tan fácil ni tan rápido que se firmara la paz.

El primer hecho significativo fue el silencio de los zapatistas ante los reitera-

* Doctora en ciencias antropológicas e investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

dos intentos de acercamiento que realizó Luis H. Álvarez para buscar el diálogo con los zapatistas. El segundo, deducible del anterior, fue la constatación de que el nuevo gobierno federal era heredero de la declaración de guerra de los zapatistas. El tercero, fue la ansiedad con la que comenzó a declarar y actuar Vicente Fox al no obtener respuestas de parte de éstos, sobre todo antes del 1 de diciembre de 2000. Y el cuarto fue la posición de desconfianza que expresó el EZLN frente al nuevo Presidente, un día después de que tomara posesión. En varios comunicados los zapatistas exigieron que el gobierno cumpliera con tres demandas para que pudiese reanudarse el diálogo (la aprobación de la iniciativa de ley elaborada por la Cocopa; el retiro de siete bases del Ejército dentro de la zona de conflicto, y la liberación de todos los presos zapatistas), y expresaron su desconfianza hacia Vicente Fox y su equipo, al no compartir con ellos ni su proyecto de nación ni sus planes para los pueblos indios de México. Mismos que el subcomandante Marcos resumió, irónicamente, en el que podría ser el lema foxista “desaparezca un indígena y cree un empresario”.¹ Con dichas declaraciones, si bien los zapatistas dijeron “partir de cero” respecto a la confianza hacia el nuevo titular del Poder Ejecutivo Federal, decidieron probar primero la voluntad política del nuevo gobierno.

Como ha podido verse en el desarrollo de los acontecimientos, el anuncio de las tres señales que demandaron los zapatistas para volver al diálogo estaban destinadas a probar la capacidad negociadora del nuevo gobierno —y su legitimidad y voluntad democrática—, así como a generar cierto ambiente en el que los zapatistas pudieran constatar la correlación de fuerzas existente entre los nuevos actores (los nuevos funcionarios gubernamentales, los miembros del Poder Legislativo y los grupos de poder que apoyaron a Fox en su campaña), para de esta manera identificar los márgenes sobre los cuales actuaría el EZLN en una posible negociación.

La primera demanda, la de la aprobación de la iniciativa de ley, tal como fue elaborada por la Cocopa y sin la posibilidad de que fuera modificada, de antemano suponía que el presidente Fox, en su intento de que la iniciativa fuera aprobada en el Congreso como suya, se enfrentaría en primer término con su propio partido, el PAN y a su proyecto legislativo de las Cartas Municipales, y después con los legisladores de otros partidos no afines a la iniciativa. La segunda demanda, si bien era la única que dependía directamente del Ejecutivo, era de esperarse que encontraría cierta resistencia dentro del Ejército mexicano, pues dentro de su lógica militar no sería fácil abandonar, sin más, un área estratégica (alrededor de 10 000 km², señalaron algunas fuentes); con el agravante, además, de que con ello se le facilitaría exigir al EZLN, de acuerdo con el derecho internacional, su reconocimiento como fuerza beligerante. Y la tercer demanda, la de liberar a todos los presos zapatistas dispersos en diferentes entidades del país, al depender del Poder Judicial, por lo menos implicaría desarrollar una gran capacidad de negociación para despertar la sensibilidad política de gobernadores y jueces en diversas

¹ Subcomandante Marcos, comunicados, 3 de diciembre de 2000, *La Jornada*.

entidades federativas, antes de proceder, como último recurso, a dictar una ley de amnistía desde la Presidencia de la República.

Al establecer estas tres demandas, puede deducirse que el EZLN estaba construyendo condiciones complejas capaces de poner a prueba la vocación democrática y la fuerza del Presidente. De igual forma, puede suponerse, que dentro de los cálculos políticos de los zapatistas, tales condiciones podrían conducir a varios escenarios. En el primero, y de cumplirse las tres demandas por la vía de la negociación, se constataría no sólo la voluntad presidencial para buscar la paz, sino su fuerza política real frente a partidos políticos, el Ejército mexicano y demás sectores sociales hasta ese momento desconfiados o francamente opositores al EZLN. Es decir, se refrendaría la confianza y el apoyo que amplios sectores sociales le dieron a Vicente Fox con su voto en las elecciones de julio de 2000. En ese caso las condiciones para el tránsito político del EZLN a la vida política legal estarían dadas puesto que existiría un buen escenario no sólo para la negociación, sino para que en México pudiera darse una contienda abierta y legal por la vida democrática.

En un segundo escenario, en el caso de que Fox optara porque se cumplieran las tres demandas por la vía de la imposición presidencial, quedaría claro, para el EZLN y para la sociedad nacional, que el cambio en México por la vía de las elecciones había sido superficial y que dejaba intacto el poder presidencial. Si bien se tendría la certeza de un presidente fuerte, se demostrarían, también, la futilidad de los cambios, lo que supondría que el EZLN no contaba con la garantía de un cambio democrático que le hiciera abandonar las armas.

Y en un tercer escenario, en el que no fuera posible ni que el Presidente convenciera contundentemente al conjunto de fuerzas políticas de que se cumplieran las tres demandas del EZLN, ni que éste impusiera su voluntad presidencial, lo que se obtendría era un amplio campo para la movilización social, ya que se habrían demostrado las limitaciones de Vicente Fox así como la volatilidad del apoyo que lo había llevado a la Presidencia. Sería ésta la señal para fortalecer al EZLN como la única fuerza política capaz de aglutinar a la sociedad civil opositora al régimen panista y a su proyecto neoliberal y desnacionalizador.

Con la reciente aprobación de una ley indígena² —que es diferente a la iniciativa de la Cocopa, distante de los Acuerdos de San Andrés y que reúne las propuestas y los temores del PRI y del PAN—, de los tres escenarios posibles el que parece haberse desarrollado es el tercero, y su construcción no ha sido ajena ni a la participación de los zapatistas, ni a la actuación de los legisladores del PAN, PRI y PRD, ni a lo que parecen ser los errores o malos cálculos del nuevo presidente de la República.

² El 25 de abril de 2001 fue aprobada, por unanimidad, en el Senado de la República una ley indígena elaborada sobre una propuesta presentada por el PRI y que difiere de la iniciativa Cocopa-Fox en aspectos fundamentales. Fue ratificada, con el rechazo del PRD, tres días después en la Cámara de Diputados. Deberá ser ratificada por, al menos, 16 entidades del país, antes de que alcance su plena incorporación constitucional. Las diferencias entre la ley aprobada y la iniciativa Cocopa-Fox pueden consultarse en el Perfil de *La Jornada*, del 28 de abril de 2001.

Como trataremos de demostrar, se trata de un nuevo escenario pero que al mismo tiempo retoma muchos de los anteriores elementos de la confrontación entre los zapatistas y el Poder Ejecutivo Federal priísta, y en la que, otra vez, ha sido fundamental —para definir el desenlace de esta primera etapa de la confrontación— el papel de los partidos políticos, con sus posiciones, sus disputas y sus particulares proyectos políticos de lo que es y debe ser este país. De esta forma veremos cómo, durante los últimos meses, tanto los zapatistas como el nuevo gobierno federal se han enfrascado en una contienda en la que cada parte ha buscado fortalecerse frente a la otra para atraer para sí la mayor legitimidad posible, lo cual en el contexto de una declaración de guerra vigente y un diálogo no restablecido entre las fuerzas contendientes significó, en un primer momento, que se desarrollara una especie de “guerra fría”, y en un segundo momento, la agudización de las contradicciones que han conducido, otra vez, a la suspensión indefinida del diálogo entre zapatistas y gobierno.

El EZLN: en busca de una renovada legitimidad

El 2 de diciembre del año 2000, la comandancia general del EZLN anunció que marcharía a la Ciudad de México a defender frente al Congreso de la Unión la Iniciativa de Ley sobre Derechos y Cultura Indígena, elaborada por la Cocopa en 1996, y que sería enviada a los legisladores, como iniciativa propia, por el presidente de la República, Vicente Fox, como uno de sus primeros actos de gobierno.

El anuncio de la Marcha por la Dignidad Indígena se presentó como uno de los primeros actos políticos de los zapatistas, luego de una larga espera durante la cual estuvieron atentos a los cambios que se suscitaron en el país con las elecciones, para elegir presidente, en julio de 2000 y para elegir gobernador en Chiapas, en agosto de ese mismo año. Durante los cinco meses de su silencio pudieron observar el proceso electoral y analizar las declaraciones de Fox como Presidente electo, la formación de su equipo de transición y sus relaciones con el PAN y los demás partidos políticos y grupos de poder. Sus conclusiones las expresaron en los comunicados que hicieron públicos ese 2 de diciembre: los zapatistas no podían confiar en alguien que había mostrado superficialidad creyendo que todo se resuelve con “vocho, tele y changarro”, sin embargo estaban dispuestos a partir de cero respecto a su confianza hacia Fox, ya que éste no había emprendido hacia ellos ninguna agresión, y por lo tanto le pidieron las tres señales como muestra de su voluntad política. En dichos comunicados reiteraron, además, su interés en participar en la vida política nacional y su confianza de que los legisladores del Congreso de la Unión comprenderían la situación indígena, y convertirían en ley los Acuerdos de San Andrés, en la versión de la Cocopa.

El llamado de los zapatistas para que los legisladores pluripartidistas contribuyeran a crear las condiciones para que se firmara la paz, lo habían hecho desde 1999 en la V Declaración de la Selva Lacandona.³ En aquel momento, como ahora, hicieron evidente el rango de respeto y confianza que estaban depositando

³ La V Declaración de la Selva Lacandona se publicó en varios diarios el 21 de julio de 1999.

en el Congreso de la Unión pero tenían claridad de que debían acompañar su exhortación a los legisladores con movilizaciones de la sociedad civil para defender la iniciativa de la Cocopa. También en ese momento la aprobación de la ley era la condición para que el EZLN decidiera transformarse en una organización legal.

En aquel entonces los zapatistas convocaron al Congreso y a la sociedad civil en un momento en que salían de otro silencio: al que recurrieron después de que no había prosperado la vía rápida para que se cumplieran los Acuerdos de San Andrés (mediante la elaboración y aprobación precisamente de la iniciativa de la Cocopa), y después de que sus aliados políticos y de la sociedad civil se concentraron en las elecciones de 1997. Igual que ahora, necesitaban fortalecerse y reconstruir sus alianzas en el nivel nacional.

El alejamiento entre el EZLN y el PRD se fue generando debido a los permanentes conflictos que vivieron estas organizaciones en torno a los procesos electorales: los que se suscitaron desde el llamado del subcomandante *Marcos* a no votar en Chiapas en 1995, hasta los que se produjeron luego de la firma de la reforma electoral de 1996 que acotó los alcances de la Mesa II de negociación en San Andrés sobre Democracia y Justicia. La distancia se profundizó aún más por la decisión que tomaron los zapatistas civiles, durante la fundación del Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN) en septiembre de 1997,⁴ de no permitirle a sus miembros ni la doble militancia ni la aspiración a puestos de elección popular. Ante la imposibilidad de conciliar posturas y ante la perspectiva de continuar disputándose las mismas bases, el PRD respondió al problema con la declaratoria, emanada de su IV Congreso Nacional, de marzo de 1998, en la cual los perredistas se deslindaron del EZLN por representar una posición radical de la izquierda en México. A partir de tales conflictos, si bien el PRD siempre ha estado en favor de crear las condiciones para que se firme la paz con justicia y dignidad e incluso ha defendido abiertamente la iniciativa de la Cocopa, el EZLN mantiene con los perredistas una relación de cierta distancia, como pudo constatare en la Marcha de la Dignidad Indígena en la que la comandancia zapatista no aceptó reunirse formalmente con los miembros de ese partido.⁵

Con el movimiento indígena nacional, en cambio, los problemas se agudizaron después de 1996 ante la dificultad de consolidar un movimiento indígena nacional, fuerte y cohesionado, alrededor de la defensa de la iniciativa de la Cocopa. En diversos foros indígenas ciertos sectores empezaron a mostrar su inconformidad con la defensa a ultranza de la iniciativa de ley de la Cocopa cuando, desde su punto de vista, era una propuesta limitada que no recogía la totalidad de los Acuerdos de San Andrés. Atrás de tal desacuerdo se encontraban, además, las diferencias respecto a la independencia y la dirección del movimiento indígena.

⁴ La dinámica que siguieron las sesiones de la reunión fundacional del FZLN, así como la que siguieron, por su lado, los indígenas del CNI reunidos también por esos días en la Ciudad de México, puede consultarse en la prensa del 13 de septiembre al 12 de octubre de 1996.

⁵ Ver al respecto las entrevistas a los dirigentes del PRD en el artículo "El PRD aún debe buscar contenidos para su definición como izquierda y proyectarse como alternativa de poder", *Proceso*, núm. 1117, 29 de marzo de 1998.

na nacional. Un problema adicional que dificultó la confluencia entre el movimiento indígena nacional y el movimiento zapatista, surgió cuando los miembros del Frente Zapatista de Liberación Nacional definieron que la filiación a esta organización debería ser individual y sus miembros no podían aspirar a puestos de gobierno ni de elección popular. Con ello, las organizaciones y comunidades indígenas quedaron excluidas. Nuevas contradicciones se presentaron frente a los procesos electorales de 1997 ya que un sector del movimiento indígena consideró necesario participar en las elecciones en alianza con el PRD, mientras que otro decidió que ello contribuiría a debilitar la posición del EZLN. De esta forma, el movimiento indígena nacional, organizado alrededor del Congreso Nacional Indígena (CNI), si bien nunca dejó de apoyar las decisiones del EZLN, entró en cierto reflujo debido a sus propias diferencias internas y al difícil silencio de los zapatistas.⁶

Por lo demás, las alianzas entre el EZLN y la sociedad civil tampoco fueron fáciles. No está de más recordar las difíciles experiencias de los zapatistas con la Convención Nacional Democráticas, con los organizadores del FZLN, así como con las personalidades y organizaciones en quienes buscó depositar la tarea de consolidar un amplio frente opositor.

Como puede verse, entonces, los objetivos planteados por el EZLN el 2 de diciembre de 2000 fueron la continuación de los que se propuso en 1999, y bajo esta perspectiva es que la marcha indígena, realizada durante marzo del 2001, se enfocó a convertir en ley la iniciativa de la Cocopa, a recomponer sus alianzas, a revitalizar el movimiento indígena nacional, a impulsar una amplia movilización social en su apoyo y, en esa medida, a fortalecer su presencia nacional para allanar su camino hacia de la vida política legal.

Ante las nuevas condiciones políticas, parte importante de la táctica zapatista fue señalar su desconfianza hacia el nuevo gobierno; reunir en torno suyo a las organizaciones y personas interesadas en los pueblos indígenas y descontentas con el proyecto foxista; propiciar una masiva movilización en apoyo a sus reivindicaciones y a la iniciativa de la Cocopa, y recordarle a los nuevos "hombres del poder" la vigencia de la lucha armada para producir el cambio en el país. Fueron señales importantes, en ese sentido, los mensajes de agradecimiento del subcomandante *Marcos* a los grupos armados que hicieron posible el paso de la marcha zapatista por sus regiones de influencia, las declaraciones de los dirigentes zapatistas sobre los riesgos del retorno de la opción de las armas en caso de que no se aprobara la iniciativa de ley Cocopa-Fox, así como el reconocimiento que hizo *Marcos*, en su mensaje de la ciudad de Puebla a los miembros de las Fuerzas de Liberación Nacional caídos en la lucha.

⁶ Las discrepancias en el seno del movimiento indígena en torno a la alianza con el EZLN, y en especial respecto a los Acuerdos de San Andrés y la iniciativa de ley de la Cocopa, nunca han sido explícitas ni han conducido a rupturas definitivas. Las diferentes posiciones, sin embargo, pueden advertirse en las relatorías de las reuniones del Foro Nacional Indígena y del CNI e incluso en sus resolutivos, en los que invariablemente se busca ratificar la unidad sobre las diferencias. Igualmente significativos son los diversos comunicados publicados en la prensa en los que el CNI ha definido su posición frente a los procesos electorales.

Los sueños de Vicente Fox

Vicente Fox abrió una nueva fase en la vida política del país al derrotar al PRI y al convertirse en el primer Presidente elegido democráticamente luego de los más de setenta años de hegemonía priísta en México. La legitimidad de su triunfo y las enormes expectativas que se despertaron con su arribo a la Presidencia de la República le dieron la confianza para suponer que la firma de la paz con los zapatistas estaba cerca, y por ello desde su campaña se dijo dispuesto a cumplir las demandas que el EZLN había exigido al gobierno de Ernesto Zedillo para volver a las mesas de negociación. Por eso, inmediatamente después de su toma de posesión, ordenó cierto repliegue del Ejército en la zona de conflicto; se dijo dispuesto a enviar como suya la iniciativa de ley elaborada por la Cocopa al Senado de la República, y habló de la posibilidad de retirar al Ejército mexicano de las comunidades indígenas, antes de que los zapatistas expresaran concretamente sus exigencias al nuevo gobierno.

Todo parece indicar, pues, que Fox creyó que su triunfo en las urnas y el haber logrado derrotar al PRI eran suficientes para que los zapatistas confiaran en su vocación democrática y en su voluntad de cambio y de paz. En ese cálculo, parecería que el Presidente y sus asesores minimizaron la desconfianza del subcomandante *Marcos* hacia las elecciones y los partidos políticos, así como las críticas que desde 1994 el EZLN lanzó contra el PAN. Asimismo, parecería también que el equipo del Presidente hizo caso omiso de las advertencias que los zapatistas permanentemente enviaron a la sociedad civil y a las organizaciones políticas y sociales democráticas, sobre lo que significaría en México el triunfo del PAN y, con ello, el arribo al poder de la derecha reaccionaria y clerical y la entrada sin límites a la barbarie del neoliberalismo.

Por el exceso de confianza mostrado permanentemente por Vicente Fox, da la impresión de que nunca creyó que los zapatistas continuarían contra él la guerra que iniciaron contra el PRI, y que incluso tendría fuertes coincidencias con los zapatistas respecto a lo que tendría que ser la nueva reforma del Estado, sobre todo en cuanto a establecer mayores mecanismos de participación y control social en las instituciones políticas, los órganos electorales y, en general, en la vida pública. Tal ingenuidad, sin embargo, parece difícil que exista en un hombre y en un grupo que logró derrotar al PRI y arribar a la Presidencia de la República con un amplio apoyo social.

Otra posibilidad para explicar la actuación del nuevo Presidente, es que él y su joven equipo desconocieran en detalle la complejidad del proceso de confrontación y negociación entre el gobierno anterior y los zapatistas y que, además, tuvieran un conocimiento superficial del EZLN (sobre sus objetivos de mediano y largo plazo, sus estrategias, sus estilos de movilización y sus maneras de confrontar a sus adversarios). Bajo ese supuesto, el equipo foxista habría construido una vía de acercamiento al EZLN que buscaría cumplir por adelantado sus demandas, para acotarlo y desmovilizarlo cuando estaban aún en el ambiente los sentimientos festivos y el apoyo masivo hacia el nuevo presidente de México. La falta de oficio mostrado en los primeros retiros militares efectuados para cumplir las tres se-

ñales que exigía el EZLN —y que provocaron que los militares se sintieran humillados por las bases de apoyo zapatistas—, podrían ser explicados también por ese desconocimiento.

Complementaria a la posibilidad anterior es que Fox, adelantándose a los zapatistas y creyendo excesivamente en su fuerza política, hubiera confiado en la sensibilidad de los partidos políticos para aprobar sin modificaciones sustanciales la iniciativa Cocopa-Fox, llevarse así el triunfo de la pacificación y proseguir sin problemas con sus asuntos y reformas sustanciales, la fiscal, la eléctrica, la petrolera y demás.

Existe, sin embargo, una posibilidad más en la que el equipo foxista, con conocimiento de causa, hubiera construido un escenario en el que Vicente Fox debería desempeñar el papel de ofrecer lo que otros (entre ellos el PAN, los otros partidos políticos, el Ejército y aun los zapatistas) se encargarían de rechazar o, en el mejor de los casos, de acotar. Un posible resultado de tal escenario sería incorporar a los zapatistas en una dinámica en la que se verían obligados a entablar una alianza con Fox para responder unidos a “los duros”, es decir, a los otros, que quedarían identificados como pertenecientes a las fuerzas más reaccionarias del país. Camino, por lo demás, ya probado por el presidente Zedillo cuando el gobernador Albores desempeñó en Chiapas el papel de “mano dura” y el gobierno federal el de conciliador. Otro resultado posible sería el que estamos viviendo ahora: un proceso muy lento para cumplir las tres demandas del EZLN; el acotamiento extremo de los contenidos de la iniciativa de ley de la Cocopa-Fox por parte del Congreso; la negativa de los zapatistas para aceptar esta ley, y la suspensión nuevamente del diálogo entre el EZLN y el Ejecutivo federal.

Vicente Fox, los zapatistas y los legisladores del Congreso de la Unión

Los zapatistas, antes de su arribo a la capital del país, tendrían que recorrer alrededor de 3 000 kilómetros del territorio nacional, realizar multitudinarios eventos por 12 de las 32 entidades del país y asistir al Tercer Congreso Nacional Indígena que se realizaría en Nurió, en la región purépecha de Michoacán.

El anuncio de la marcha, la descripción del itinerario, así como la declaración de que los zapatistas viajarían y hablarían con los legisladores con sus capuchas puestas repitieron los debates y controversias legales que ya se habían vivido en 1997, cuando se realizó la marcha de los 1 111 zapatistas a la Ciudad de México. Los mismos argumentos, los mismos temores y casi los mismos actores se expresaron apasionadamente en favor y en contra de la marcha zapatista. El PAN mantuvo la posición de rechazo que siempre ha tenido hacia las incursiones del EZLN fuera de Chiapas y se mostró inconforme con la posibilidad de que sus legisladores dialogaran con personas de identidad oculta, en tanto que los miembros del PRD y el PRI, aunque con diferencias internas, se mostraron más abiertos a esa posibilidad.

El presidente Fox, con una posición titubeante y sumamente precavido respecto al retiro de las siete posiciones que exigían los zapatistas, se mostró cauto durante el anuncio de la marcha y sólo ante la proximidad de ésta, decidió darle

la bienvenida. Entonces, desplegó una importante campaña en los medios de comunicación en la que se manejó el mensaje de que los zapatistas, en una convergencia de intereses, venían a apoyar la iniciativa de ley Cocopa, que ahora era también la suya, pues había sido depositada desde el 5 de diciembre en el Senado de la República. Aun así, exigió a los zapatistas el diálogo directo con el Ejecutivo como muestra de su deseo de paz y como condición para cumplir con el retiro del Ejército. Los zapatistas, en cambio, durante toda la marcha subrayaron las distancias y acentuaron sus agresiones al Presidente. Especial rechazo les mereció el Plan Puebla-Panamá, sobre el cual hablaron en los días de la marcha tanto Vicente Fox como el canciller Jorge G. Castañeda.⁷

El apoyo masivo a la marcha zapatista fue contundente. Miles y miles de personas se volcaron a las calles para aplaudirla a su paso y cientos de organizaciones se movilizaron para conseguir los recursos necesarios para su buen desarrollo. Amplios contingentes del CNI acompañaron en todo momento a la delegación zapatista, y en el ámbito internacional las personalidades siempre cercanas al EZLN le refrendaron su apoyo y aceptaron participar en el acontecimiento. Varios activistas internacionales acompañaron también la organización y el paso de la marcha.

Vicente Fox, inmerso de lleno en esa intensa batalla por consolidar posiciones y legitimidades, requirió fortalecerse no sólo ante los zapatistas sino también frente a su partido y a la iniciativa privada que le reprochaban cada vez más alarmados el haber revivido al EZLN.

Los reiterados ataques de los zapatistas contra Fox fueron contestados por éste con discursos de bienvenida y condescendientes hacia el EZLN; la simpatía internacional que despertó la marcha zapatista fue contrarrestada por Fox mediante un intenso trabajo de cabildeo en medios diplomáticos y organismos internacionales hasta que logró convencerlos de sus intenciones de paz hacia los zapatistas; la movilización y la presión de los miles y miles de mexicanos que apoyaron a los rebeldes chiapanecos en su marcha, pretendió menguarse mediante el apoyo que le dieron a Fox los miles y miles de mexicanos que firmaron en favor de la paz en escuelas, bancos y tiendas de autoservicio y que asistieron al estadio Azteca o vieron por televisión el concierto "Unidos por la Paz", organizado por Televisa y Televisión Azteca. Un punto ejemplar de la confrontación fue cuando los zapatistas llegaron al Zócalo de la Ciudad de México acompañados por miles de mexicanos y la televisión omitió la transmisión directa.⁸ La entrada de los zapatistas al corazón de la capital del país fue triunfal, apoteósica. El 11 de marzo, miles de personas reiteraron su apoyo a la dirigencia zapatista en su trayecto hacia el centro de

⁷ Principalmente en foros internacionales, dicho plan se presentó como la continuación de la firma de la paz con los zapatistas ya que se propone como un programa integral de cooperación con Centroamérica para enfrentar conjuntamente el rezago y el desarrollo del sur y el sureste mexicano. Véase *La Jornada* de los días 30 y 1 de abril de 2001.

⁸ Los grupos Jaguares y Maná tocaron en dicho concierto que se efectuó el 3 de marzo, asistieron a él 100 000 personas, y fue visto en diversas ciudades del país en pantallas gigantes colocadas en las plazas públicas. En contraste, únicamente Radio Red cubrió la totalidad de la entrada de los zapatistas al Zócalo de la Ciudad de México.

la ciudad y otros tantos miles llenaron las calles aledañas y el Zócalo, en una movilización sin precedentes en el país.

Sin embargo, más que una guerra mediática emprendida entre Vicente Fox y los zapatistas, los hechos recientes pueden interpretarse como producto de una contienda entre dos fuerzas que buscaban mejorar sus posiciones ante la eventualidad de una posible negociación: el Presidente, valiéndose del apoyo que le brindan los medios masivos de comunicación, y los zapatistas, por medio de la intensa movilización social.

En esa confrontación, los partidos políticos así como sus legisladores en el Congreso se vieron inmersos en una dinámica que los obligó a definirse, y a radicalizarse, respecto al EZLN, al presidente Fox y a la iniciativa Cocopa-Fox. Ciertamente, desde que dicha iniciativa ingresó al Senado, los legisladores, tanto de la Cámara de Senadores como de la de Diputados, habían estado desarrollando actividades de consulta para tomar una posición al respecto pero no fue sino hasta que los zapatistas llegaron a la Ciudad de México, que se vieron en la necesidad de definirse. El PAN insistentemente mantuvo una postura de independencia y oposición respecto al Presidente, no sólo en relación con la iniciativa Cocopa-Fox, sino a la forma como éste estaba conduciendo el conflicto y el acercamiento con los zapatistas. Ello a pesar de las intensas pláticas que sostuvieron con el secretario de Gobernación, Santiago Creel, y aun con el presidente Vicente Fox.⁹ Una posición similar expresaron los legisladores priístas y únicamente el PRD se definió en favor de aprobar dicha iniciativa y de que los zapatistas hablaran en el Congreso.

Finalmente, el 12 de marzo con el voto del PRI y el PAN y el rechazo del PRD, los legisladores enviaron a los zapatistas, por medio de la Cocopa, su propuesta para el encuentro: éstos podrían reunirse únicamente con representantes de las comisiones dictaminadoras de la ley indígena de ambas cámaras, es decir con 20 legisladores, más los miembros de la Cocopa. Los zapatistas, como era de esperarse rechazaron la propuesta un día después y agraviados exigieron hablar en la tribuna del Congreso. Una semana completa esperaron los zapatistas para que el Congreso propusiera nuevas opciones para su encuentro. Durante ese tiempo, teniendo como sede la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el EZLN visitó el Politécnico Nacional y se dedicó a dar entrevistas a medios nacionales e internacionales y a consolidar viejas relaciones de amistad y convergencia con organizaciones sociales y políticas.

Los legisladores, en tanto, más que analizar el llamado que desde 1999 el EZLN lanzó para que el Congreso de la Unión contribuyera a construir un escenario para la paz, continuaron enfrascados en discusiones sobre protocolo, legalidad, lugares posibles para la reunión y los interlocutores formales que debían tener los zapatistas. Tras esas discusiones se expresaban, sin duda, divergencias más profundas respecto a la lucha armada, el EZLN, el proceso de-

⁹ Algunas declaraciones del PAN al respecto pueden leerse en la prensa del 4 de febrero y del 7 de marzo de 2001.

mocrático, el proyecto foxista y las posiciones de poder de legisladores y partidos dentro de las cámaras. Pero, al parecer, no fueron capaces de entender el papel de interlocución y aun de mediación que implícitamente les había otorgado el EZLN.¹⁰

Molesta por la falta de propuestas, la dirigencia del EZLN, el 20 de marzo, anunció su retiro de la Ciudad de México. El 21 visitarían la UAM y la UNAM y el 22 de marzo los zapatistas realizarían un mitin afuera del Congreso de la Unión para decir lo que los legisladores no habían querido escuchar y al otro día abandonarían la ciudad para regresar a sus posiciones en la montaña.

En medio de la crisis los cabildeos entre las distintas fracciones partidarias se intensificaron para tratar de llegar a arreglos. Algunos tenían la sensación de que Fox irresponsablemente les había “mandado la pelota” sobre el conflicto en Chiapas y que el costo político del fracaso lo tendrán ellos. Y nuevamente, de acuerdo con lo que los ciudadanos pudimos conocer por los medios de comunicación, los legisladores evadieron en su análisis el tema del importante papel que, en efecto, aunque por razones diferentes, le habían dado al Congreso tanto los zapatistas como Vicente Fox.

Después de un complejo proceso, imposible de describir en sus detalles, mediante una cerrada votación en la Cámara de Diputados se aprobó la propuesta para que los zapatistas hablaran en el Salón de Plenos del Congreso en San Lázaro. El PAN argumentó hasta el final la ilegalidad de la propuesta, pues desde su perspectiva la tribuna es y deberá ser sólo para legisladores y nunca para que la usen guerrilleros anónimos y encapuchados.

Los zapatistas, que ya habían realizado su mitin a las afueras de San Lázaro, aceptaron la propuesta. Desde San Cristóbal de las Casas había llegado la noticia de que se estaba desarrollando una marcha antizapatista con campesinos, indígenas y ganaderos dispuestos a no dejar que regresara a Chiapas la dirigencia zapatista. No se sabe cuánto influyó esta noticia en la decisión zapatista.

Se abrió nuevamente el campo de la esperanza y nacieron las elucubraciones: ¿qué si se firmaría allí mismo la paz, que si en el Salón de Plenos espectacularmente *Marcos* se quitaría la capucha... No obstante, y contra lo que muchos esperaban, el subcomandante *Marcos* no asistió a la cita con el Congreso y la comandante Esther habló en nombre de las comunidades zapatistas y del EZLN. Apegados a un formato muy estrecho, los comandantes zapatistas y los delgados del CNI respondieron a las preguntas que siempre se han expresado respecto a la iniciativa de ley Cocopa-Fox: la democracia y los derechos humanos entre los indígenas, la situación de la mujer, las formas de gobierno y la toma de decisiones en las comunidades, el manejo de los recursos naturales y la pobreza. El PAN, representado también por una mujer, dijo estar hablando, igual

¹⁰ Los legisladores de las diferentes fracciones discutieron sobre su encuentro con el EZLN desde que éste anunció la marcha a la Ciudad de México. El debate se recrudeció, sin embargo, entre el 13 y el 20 de marzo, después de que los zapatistas rechazaron el formato decidido por el PRI y el PAN y anunciaron su retorno a Chiapas.

que los zapatistas, con la palabra verdadera y exigió, igual que ellos, también ser escuchado con respeto.

El subcomandante *Marcos*, con miles de seguidores esperó afuera de San Lázaro y se preparó para la despedida. En su último comunicado en la Ciudad de México indicó que el EZLN, con su presencia ante el Congreso de la Unión, había cumplido con su misión iniciada en 1999. Con el ánimo esperanzado anunció la orden para que su enlace, Fernando Yáñez, entablara, por fin, comunicación con el representante de Fox, y para que, junto a la Cocopa, verificaran el cumplimiento de las señales. En ese mismo tono el Presidente decidió concluir el retiro de las siete bases militares como lo había demandado el EZLN. Se anunció oficialmente que se convertirían en centros para el desarrollo social. En ese ambiente festivo, la presencia del EZLN en el Congreso se vivió como un triunfo político del EZLN y como un gran avance de la democracia nacional.

En su retorno a las montañas del sureste los comandantes indígenas y especialmente el subcomandante *Marcos*, evaluaron como exitosa la marcha zapatista y recurrentemente hablaron de un tiempo cercano en el que los indígenas chiapanecos ya no tendrían que usar capuchas ni deberían recurrir a las armas para hacerse escuchar. Todo ello hizo suponer que los rebeldes estaban dispuestos a firmar la paz en fechas no muy lejanas, aunque dejaron sin respuesta preguntas fundamentales, como por ejemplo, si aceptarían, para volver al diálogo, la aprobación de una ley sobre derechos indígenas diferente a la iniciativa elaborada por la Cocopa pero con lo esencial de los Acuerdos de San Andrés; si la paz, por el contrario, quedaría condicionada a que se realizaran las mesas de negociación pendientes, y hasta dónde podrían ceder, frente al gobierno foxista, en las negociaciones sobre democracia, justicia y desarrollo social.

Los resultados de la contienda y las preguntas sin respuesta

Tal como lo anunciaron los zapatistas desde su V Declaración de la Selva Lacandona, éstos resultaron ser los tiempos del Congreso y en sus manos quedó la aprobación de la iniciativa de ley sobre derechos y cultura indígena, en la versión de la Cocopa, sólo que la actuación de los legisladores no fue ajena ni a la dinámica del conflicto entre el EZLN y el gobierno federal, ni a los conflictos de poder que viven los propios partidos dentro de las cámaras.

Mucho se ha hablado de lo que pasó en el interior de los grupos parlamentarios en las cámaras de Senadores y de Diputados y de la negociación que condujo al PAN a aliarse con el PRI para aprobar la iniciativa de estos últimos. Mucho se ha dicho también de las razones por las que el PRD aceptó en el Senado votar en favor de la propuesta del PRI, aunque sólo en lo general, mientras decidió rechazarla en la Cámara de Diputados. Entre las explicaciones que han brindado los analistas políticos destacan: la ruptura entre los dirigentes del PAN y el presidente Fox; el antagonismo de los panistas, y en especial de Diego Fernández de Cevallos con el zapatismo; la debilidad numérica del PRD en las cámaras y su inconsistencia ideológica, y la cercanía de proyectos políticos entre el PRI y el PAN. Sean cuales fueran las explicaciones, ahora, como ya había sucedido en el pasado, la

Iniciativa de Ley sobre Derechos y Cultura Indígena quedó supeditada a coyunturas y negociaciones políticas ajenas a sus contenidos y a sus implicaciones para la vida de los pueblos indígenas y la nación mexicana.

El resultado, en todo caso es dramático: tenemos una ley indígena más parecida a las iniciativas de ley enviadas al Congreso por el PRI y el PAN, en los tiempos de Ernesto Zedillo, que a los Acuerdos de San Andrés, y también el rechazo del EZLN a la ley indígena recientemente aprobada. Y nuevamente el diálogo está suspendido aunque el gobierno de Fox haya cumplido, por fin, con el retiro de las siete posiciones que exigían los zapatistas y aunque los foxistas continúen insistiendo en sus gestiones para que salgan libres los pocos zapatistas que aún están presos.

La situación es muy grave y cabría preguntarse, y preguntarle a todos los actores involucrados, si el desenlace que hoy vivimos entró o no dentro de sus cálculos políticos.

El presidente Fox, preocupado por otros asuntos, entre ellos la aprobación de su reforma fiscal, parece haber hecho a un lado su interés en los derechos indígenas y no ha respondido preguntas esenciales, entre ellas las que tienen que ver con el tipo de país que está impulsando y en ese marco lo que esperaba de las negociaciones con el EZLN. De haberse aprobado su iniciativa de ley, ¿hasta dónde su proyecto de país, con sus reglas democráticas y su modelo de desarrollo y justicia social hubiera sido compatible y negociable con las aspiraciones de los zapatistas? ¿Estaba dispuesto a discutir sus propuestas en las mesas de negociación con el EZLN? ¿Está dispuesto a hacerlo con el resto de los mexicanos? Y sobre lo que ha sucedido, ¿hasta cuando los mexicanos, y particularmente los indígenas, tendremos que quedarnos como rehenes de una contienda político-militar que no tiene posibilidades de solución?

El beneplácito inicial de Vicente Fox ante a la ley indígena aprobada por el Congreso, así como su escasa preocupación por las modificaciones y omisiones sustanciales que los legisladores hicieron a la iniciativa Cocopa-Fox, parecen confirmar la idea de que el Presidente optó porque fueran los legisladores los encargados de limitar los alcances de la ley indígena y que cargaran ellos, junto al EZLN y su rechazo a la nueva ley, con el consecuente costo político de la maniobra.

De no haberse calculado así y que los resultados fueran inesperados también para el equipo del representante del Poder Ejecutivo federal estaríamos frente a un grupo inexperto, voluble, que no ha sabido conducirse adecuadamente para propiciar las negociaciones ni con el EZLN ni con los miembros de su partido y menos con los demás actores involucrados, y que pese a sus discursos en favor de la paz, le estaría apostando a reeditar la confrontación EZLN-gobierno federal, sólo que ahora en un contexto diferente al anterior; es decir, en uno en el que la legitimidad estaría del lado del gobierno y la cerrazón del lado del zapatismo armado, lo que justificaría una solución militar y no política del conflicto. La fuerte campaña publicitaria del equipo foxista para mostrar al Presidente abierto y haciendo suyas las demandas zapatistas, habría tenido como finalidad modificar la percepción nacional e internacional sobre de qué lado están ahora la legitimidad y las actitudes abiertas al juego democrático.

Respecto a los zapatistas, no extraña su respuesta ante la nueva ley sino el sentido de la odisea que decidieron emprender el 2 de diciembre del año 2000. Por ello, las preguntas que hay que hacerles son las siguientes: ¿en algún momento realmente creyeron que la iniciativa de ley Cocopa-Fox iba a ser aprobada sin modificación alguna, conociendo, como conocen, la composición partidista de las cámaras y las posiciones que el PRI y el PAN siempre tuvieron respecto a esa iniciativa? Pero, de haberse aprobado esa iniciativa, por las razones que hubiera sido, ¿habrían firmado la paz con el gobierno de Fox, sobre el que en extensos comunicados han marcado ya sus radicales discrepancias? ¿Cuáles iban a ser las condiciones exigidas para que pudieran convertirse en una fuerza política legal? ¿Y hasta dónde las tres señales pedidas a Fox no fueron sólo una manera de construir un escenario y una confrontación que les permitiera mantenerse en la resistencia y en la oposición armada, pero una vez que las nuevas circunstancias le hubieran demostrado al mundo y a la sociedad nacional, la imposibilidad de concretar su tránsito hacia la vida legal?

Ciertamente existe la posibilidad de que, como lo expresaron en la V Declaración, confiaran en la sensibilidad de los legisladores y en la movilización para convencerlos de la importancia de la iniciativa, pero entonces, ¿para qué recurrir permanentemente a la amenaza de la opción armada? ¿Para qué, desde esa amenaza, agudizar las contradicciones con los panistas y los priístas si de ellos dependía la aprobación de la ley? ¿Y para qué, en todo caso, agudizar en esta fase las contradicciones con el Presidente?

Las preguntas que quedan son para los legisladores: ¿qué esperaban después de la aprobación de la ley indígena en los términos que lo hicieron? ¿Creían realmente que el EZLN la aceptaría así y después vendría la firma de la paz? ¿O se trató, como algunos lo suponen ya, de una manera de revivir el conflicto armado para dar elementos justificatorios para una solución militar, y/o para acabar con la imagen triunfante de Vicente Fox?

De ser cierto que hubieran pesado más para sus decisiones las disputas interpartidistas, las relaciones conflictivas con el Presidente y el deseo de prolongar el conflicto para minar su gestión estaríamos ante un grupo de legisladores y partidos políticos que habrían defraudado la confianza que todos habíamos depositado en ellos, los zapatistas, el gobierno federal y la sociedad en su conjunto.

El "hubiera", sin embargo, no existe en la historia ni en la política. Por ello las preguntas planteadas tienen la finalidad de invitar a los actores involucrados, así como a los interesados en el tema, a reflexionar sobre las posibilidades de construir un devenir diferente a lo que han sido los últimos seis años del conflicto entre el EZLN y el Ejecutivo federal. En esos años los derechos indígenas han sido el centro de la confrontación y, con ellos como pretexto, diversos actores se han disputado posiciones.

En un primer momento las organizaciones indígenas depositaron en el EZLN la representatividad para obtener del gobierno federal, mediante la negociación, la constitucionalidad de sus derechos; en un segundo momento, los zapatistas y el Ejecutivo federal depositaron en los legisladores de la Cocopa la responsabilidad

de construir una iniciativa de ley que recogiera los Acuerdos de San Andrés como un paso importante para consolidar la paz, y en un tercer momento tanto los zapatistas como el presidente de la República depositaron en el Congreso de la Unión la responsabilidad histórica de convertir en ley lo acordado en San Andrés, mediante la versión elaborada por la Cocopa. Ninguno de estos intentos ha prosperado de manera que posibilite el acuerdo, la conciliación y la firma de la paz.

En la actualidad, zapatistas, organizaciones indígenas y no indígenas, intelectuales y muchos otros simpatizantes de la causa indígena se preparan para defender nuevamente la iniciativa de la Cocopa, como la única que recoge los Acuerdos de San Andrés y lo harán en un escenario de mayor confrontación y polarización. Ante tal situación valdría la pena reflexionar sobre las posibilidades de éxito, o si lo que debe seguir es la construcción de una opción diferente, que rompa con la lógica político-militar en la que han estado hasta ahora discutiéndose los derechos indígenas. Habría que preguntarse, entonces, si éstos no son “los tiempos de los indígenas y de la sociedad civil” para que, unidos, elaboren la propuesta de ley alternativa que recupere los Acuerdos de San Andrés, los transforme en iniciativa de ley y posibilite el acuerdo para su aprobación, entre EZLN, Ejecutivo, Legislativo y los partidos políticos. Quizá, solamente la sociedad civil, indígena y no indígena, independiente y convergente, pueda sacar a los actores descritos de esa lógica de confrontación que ha impedido una respuesta satisfactoria para los pueblos indígenas de México ●

